



Iconos. Revista de Ciencias Sociales

ISSN: 1390-1249

revistaiconos@flacso.org.ec

Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales

Ecuador

James Hawkins, Daniel

Reconfiguración del estado colombiano: el difícil balance entre consenso y coerción

Iconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 35, septiembre, 2009, pp. 105-116

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Quito, Ecuador

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50911906010>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Reconfiguración del estado colombiano: el difícil balance entre consenso y coerción

*Reconfiguration of the Colombian State:
the Difficult Balance Between Consensus and Coercion*

Daniel James Hawkins

Estudiante de Doctorado. Universidad de Kassel, Alemania.

Correo electrónico: danhawkins@uni-kassel.de

Fecha de recepción: noviembre 2008

Fecha de aceptación y versión final: mayo 2008

Resumen

Este artículo analiza la transformación del estado nacional colombiano bajo el gobierno de Álvaro Uribe, centrándose en el Plan Colombia y los proyectos estatales que se desprenden de él con el fin de dar cuenta de la militarización estatal y la represión social asociada a ambos. Se argumenta que políticas de gobierno amparadas en dicho Plan tienen como objetivo la consolidación de un régimen de acumulación de mercado extractivo y especulativo que, aunque vinculado a un impulso hegémónico transnacional centrado en los Estados Unidos, también está íntimamente ligado a desarrollos locales y al conflicto interno de Colombia. Estas interacciones ofrecen una ilustración ejemplar de la reconfiguración a múltiples escalas de la política en la economía del mundo actual.

Palabras clave: Consenso, neoliberalismo, hegemonía, comunitarismo, seguridad democrática, militarización, paramilitarización, narcotráfico

Abstract

This article analyzes the transformation of the colombian national state under the government of Álvaro Uribe, focusing on Plan Colombia and the state projects that flow from it, in order to reflect on the militarization of State and the social repression associated with both. It is argued that government policies under the Plan are aimed at consolidating a regime of market accumulation and speculation that, while linked to a transnational hegemonic thrust emanating from the United States, is also closely linked to local developments and Colombia's internal conflict. These interactions provide an exemplary illustration of the reconfiguration at multiple levels of the world political economy today.

Keywords: consensus, neoliberalism, hegemony, communitarianism, democratic security, militarization, paramilitarization, narcotraffic

Este artículo se enfoca en las reconfiguraciones del estado nacional colombiano tras la emergencia del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el 2002. Se prestará atención a cuatro aspectos del programa político de este gobierno y a los proyectos específicos asociados con el régimen, así como los múltiples lazos que este tiene con el neoliberalismo, en general, y con las políticas estadounidenses, en particular. En primer lugar, se realizará un análisis de la creciente militarización del estado como se ilustra en las políticas del Plan Colombia/Plan Patriota, pues se considera que las mismas están basadas en una reformulación discursiva y la subsecuente regionalización del conflicto que, en Colombia, tiene décadas de duración. Luego, se hará un breve análisis del discurso populista del presidente Uribe, específicamente, en relación al vínculo que establece entre seguridad y economía. Este discurso es la piedra angular de su intento de proyectar un nuevo imaginario político nacional basado en el comunitarismo. En un tercer momento, la atención pasará de los aspectos discursivos y materiales de los proyectos políticos, manifestados a escala múltiple a través del Plan Colombia y el gobierno de Uribe, hacia un análisis que enfatiza los impactos y reconfiguraciones sociales que tales programas han impulsado. Finalmente, se revisará las intrincadas conexiones entre la narco-economía ilícita y el crecimiento de la influencia paramilitar y guerrillera en la vida política colombiana. Esto ayudará a iluminar los diversos impactos y el sesgo de clase de los programas del gobierno del presidente Uribe.

La institucionalización a múltiples escalas del Plan Colombia

La aprobación formal del Plan Colombia por el entonces presidente estadounidense, Bill Clinton, el 13 de julio de 2000, inició la concretización y bilateralización de un plan que había estado implícito en la política exterior

estadounidense desde finales de la Guerra Fría. Esto significó también la reformulación categórica del Plan Colombia, pensado originalmente por Pastrana y publicado en mayo de 1999, el cual estaba orientado a terminar el conflicto interno colombiano de ya varias décadas. El nuevo enfoque centrado en el tráfico de droga y el reforzamiento militar, permitió al gobierno estadounidense intensificar su 'guerra contra la droga' y consolidar su acercamiento a los 'países proveedores'. Esto con el objetivo de atacar el cultivo de la hoja de coca, lo que reduciría supuestamente su oferta, al volverla más costosa y peligrosa de cultivar y vender. Una extensa bibliografía ha documentado continuamente las fallas de dicho acercamiento¹. Así, más que la capacidad del gobierno estadounidense para contener la ascendente ola de drogas ilícitas, se argumenta que lo que estaba en juego era la propagación de un discurso político que explotara las posibilidades que el comercio global de drogas ilícitas traía a una nación que estaba luchando por encontrar un nuevo 'peligro externo'; enemigo con el cual reemplazar la ahora difunta retórica ideológica y política anti-comunista (antisoviética). Fue bajo el régimen de George H. W. Bush que la 'guerra anti-drogas' tomó forma realmente, viniendo a ocupar una parte clave de su discurso a la nación en 1989. Junto a esta nueva retórica, el hecho de que el cultivo de la hoja de coca se encontrara aislado en la región andina resultó conveniente al discurso tradicional estadounidense que contrasta la identidad nacional americana con un 'otro' extranjero y peligroso.

¹ Los informes recientes del *International Crisis Group* muestran el fracaso de esta política. Entre 2004 y 2006 se erradicaron (entre fumigaciones y erradicación manual) casi 600.000 hectáreas de cultivos de coca en Perú, Colombia y Bolivia. Sin embargo, estos tres países continúan produciendo cerca de 1000 toneladas de hidroclorato de cocaína; una cantidad más o menos igual que cuando el Plan Colombia empezó. Véase "Drogas y Democracia", *El Tiempo*, 24/05/2008.

La institucionalización inicial del Plan Colombia como principal política bilateral anti-drogas liderada por los Estados Unidos se convirtió, en enero de 2001, en parte de la *Iniciativa Regional Andina*, lo que ayudó a consolidar los objetivos políticos de la Política Exterior estadounidense. Sin embargo, hubo una reformulación y expansión de este Plan después de los eventos contingentes que replantearon las prerrogativas de seguridad tanto de Estados Unidos como del mundo en el 2001. En línea con quienes sostienen que estrategias políticas y proyectos específicos existen y surgen de discursos (Jessop 2002: 34), se ha argumentado que después del 11 de septiembre, el gobierno republicano estadounidense tomó ventaja del 'espacio de maniobra' abierto por dicho evento. Y además, utilizó el discurso del 'terrorismo global' como medio para legitimar ciertas políticas que, de otra manera, hubiesen enfrentado una difícil aprobación pública y del Congreso. De esta manera, el discurso del 'narcoterrorismo' ganó prominencia y los dos grupos guerrilleros más importantes de Colombia (el ELN y las FARC-EP) recibieron 'nuevas' identidades públicas. Ya no se trataba solamente de insurgentes locales con motivaciones políticas e ideológicas sino de terroristas globales que sobreviven y prosperan gracias al comercio de droga. Se arguye que esta transformación discursiva se basa en relaciones de poder desiguales. Relaciones a través de las cuales aquellos grupos que controlan el terreno ideológico por medio de la regulación de las instituciones estatales y del espacio público de información, determinan la manera en que algunos significados son propagados, en tanto otros son expulsados del discurso público dominante.

Paralelamente a este cambio discursivo, que fué de la lucha contra el tráfico de droga al enfrentamiento militar de las FARC-EP, la ayuda estadounidense a Colombia, como parte del Plan Colombia, ascendió a 2 billones, 909 mil millones USD, entre los años 1997-2003. El 82% de este total se desembolsó entre

1999-2003 y la gran mayoría fué canalizado hacia los militares². Bajo los gobiernos de Álvaro Uribe y George W. Bush, respectivamente, esta tendencia se intensificó. El 15 de febrero de 2005, Bush pidió una cantidad similar a la del 2004 como ayuda para Colombia: 579.6 millones USD. Desagregando esta cantidad, 427.5 millones fueron entregados al ejército y la policía colombianos; los restantes 152.2 millones fueron destinados a programas de asistencia económica y social³. La reciente disminución del 10% en los montos totales aportados por Estados Unidos para el Plan Colombia en el año 2008, puede atribuirse a la reconfiguración política de las fuerzas bipartidista en ese país durante el 2007, cuando los demócratas tomaron control unánime del Congreso. Sin embargo, como proyecto político a mediano plazo, el Plan Colombia ha sido sinónimo de fortalecimiento del aparato estatal militar/policial en Colombia y de la priorización de la campaña militar contra las FARC-EP⁴. En efecto, previo al acrecentamiento de las fuerzas armadas asociado con la gradual transformación del estado y con el Plan Colombia, y pese de su larga historia de guerras civiles e insurrecciones sociales y políticas, el tamaño del ejército colombiano en relación al tamaño de la población, fue significativamente menor que el de sus vecinos, Perú y Ecuador (Hylton 2003). Nos preguntamos, en qué medida este refuerzo de las esferas de la 'seguridad del esta-

2 En efecto, entre los años 1997-2003, la ayuda estadounidense a Colombia estuvo desproporcionalmente dividida ya que 2400 millones USD fueron destinados a ayuda militar y 509 millones USD a programas económicos y sociales, todos relacionados en realidad con políticas de control antinarcóticos (Estrada 2002: 41).

3 Datos obtenidos de la página del centro para política internacional "Colombia Program". Disponible en: <http://www.ciponline.org/colombia/aid06.htm> (visitado 09/06/2006).

4 Para ilustrar la preeminencia que la esfera militar ha tenido en el gobierno de Uribe, mencionamos que durante el 2008 el Ministerio de Defensa recibió 3400 millones de pesos colombianos, principalmente para renovación de transporte y para compensar la incorporación de 13 000 miembros adicionales a los aparatos estatales de 'seguridad' (Venegas 2008).

do' podría estar asociado con objetivos políticos de mayor alcance.

Plan Colombia: ¿más que una política de guerra?

Desde el momento de su firma oficial, el Plan Colombia no sólo ha significado el acrecentamiento del rol de los aparatos militares-policiales en Colombia sino un mayor involucramiento militar de Estados Unidos en la región, particularmente en el conflicto interno colombiano. Además se ha convertido en la esfera clave dentro de la cual numerosas advertencias legales y restricciones constitucionales, tanto estadounidenses como colombianas, han sido dejadas de lado para permitir una mayor colaboración militar y un mayor ejercicio de los poderes presidenciales. Sin embargo, sería ingenuo asociar al Plan Colombia con la militarización colombiana y también regional, exclusivamente. Al contrario, la amplitud de este Plan yace en su intrincado alineamiento con otros numerosos proyectos de alcance local y global.

Muchos autores han analizado la íntima conexión que el Plan Colombia tiene con el proyecto, más amplio, de establecer y consolidar un orden mundial neoliberal, con un énfasis particular en América Latina y el Caribe (Torre 2005; Estrada 2002). Tanto Estrada como de la Torre enfatizan la manera en la que el Plan Colombia opera en armonía con las políticas de ajuste económico y fiscal del Fondo Monetario Internacional. Estas políticas, ancladas en la retórica del Consenso de Washington (en sus versiones antigua y más reciente), funcionan dentro de una lógica neoliberal global, de corte financiero, en la cual la civilización viene a estructurarse alrededor del mercado. De ahí, que se vea al Plan Colombia como un brazo coercitivo tanto como un medio que exige el compromiso con dicho proyecto. En palabras de Estrada, "sin los recursos del Plan Colombia, las medidas de ajuste del neoliberalismo ortodoxo tendrían que ser mu-

cho más drásticas [en el país]" (Estrada 2002: 45).

En efecto, desde el 2002, todos los fondos estadounidenses que forman parte del Plan Colombia han sido cubiertos bajo el programa regional denominado Iniciativa Andina Anti-Droga (IAA), que incluye también ayuda antidroga para los países vecinos de Colombia. Sin embargo, Colombia sigue siendo el blanco central de este proyecto, ilustrando ejemplarmente los varios componentes que se encuentran bajo su influencia. Esta integración del Plan Colombia con políticas neoliberales y objetivos hegemónicos más amplios, estructurados dentro del discurso público de la 'guerra contra las drogas' y la 'guerra contra el terrorismo global', debe ponerse en relación con la política doméstica colombiana, principalmente, con el actual gobierno colombiano, liderado por el presidente Álvaro Uribe, así como con el proyecto militar 'interno' implementado por este gobierno como medio para consolidar su programa de seguridad democrática.

El presidente Uribe: neo-populismo y el fin de la política bipartidista en Colombia

El gobierno de Uribe y su proyecto político de 'seguridad democrática' se vuelve mucho más claro cuando se enfocan los cambios estructurales y graduales que ha sufrido desde la implementación del Plan Colombia. Con la ascensión de Uribe a la presidencia en mayo de 2002, se dió inicio al primer gobierno verdaderamente populista en más de 100 años como lo ha calificado de la Torre (2005). Sin embargo, el estilo del populismo de Uribe contrasta con el estilo tradicional de liderazgo populista, que se enfoca en el desarrollo interno y la integración de las masas a la esfera política. Más bien, Uribe es visto como un populista caracterizado por un caudillismo tecnocrático: ha abandonando la forma desarrollista neo-mercantilista del estado y una postura anti-imperialista para enfocarse en la reduc-

ción del estado. Una reducción del Estado lograda a través de la privatización del sector público y la reorientación del desarrollo hacia una forma de regulación económica basada en el mercado. El proyecto político de Uribe por tanto incorpora la idea Rousseauiana del ‘comunitarismo’, es decir, la democracia directa y el anti-institutionalismo junto a una ideología neoliberal preocupada por la eficiencia y la competitividad del sector privado. Ambos elementos enmarcados en la noción más amplia de la ‘seguridad democrática’ y la militarización de la vida social.

El proyecto comunitarista auspiciado por el gobierno de Uribe es uno con un definitivo dejo criollo. El proyecto de Uribe, en la esfera política, se centra en la unidad de la comunidad o, en los términos populistas del presidente, “la patria”. La nación colombiana se convierte, a los ojos del presidente, en la guardiana moral del pueblo y asume una posición privilegiada contra el flagrante individualismo asociado con la filosofía política liberal. En efecto, mientras en el liberalismo clásico, todos los ciudadanos tienen derecho a cuestionar a la autoridad y al gobierno, y a involucrarse en la discusión pública –posibilidades que son garantizadas a través de medidas formales tales como la Constitución–, el proyecto comunitarista de Uribe se basa en canales informales que permiten a los ciudadanos (o más apropiadamente, *el pueblo*) acceder a la *buena vida*. Lo que un renombrado teórico político asociado con el comunitarismo denomina “ética substantiva” (MacIntyre 1984).

El ambiguo término “buena vida”, en el contexto colombiano, está asociado más que nada con la seguridad personal y económica. Esta es la justificación fundamental de la guerra emprendida por Uribe contra los grupos guerrilleros (especialmente las FARC-EP), al considerar que representan la mayor amenaza a la existencia segura de la comunidad. Uribe ha repetido constantemente que los colombianos de su generación nunca han vivido un día de paz; de ahí que su objetivo de derrotar mili-

tamente a las fuerzas guerrilleras de izquierda sea la expresión de un esfuerzo por asegurar una paz que luego se convierte en el bien público supremo de la comunidad.

Las particularidades del contexto colombiano, especialmente su prolongada guerra civil y la subsiguiente fragmentación de la soberanía del estado, o lo que Hobbes llamaría la inexistencia de un *pactus subjectionis*⁵ (Sousa Santos y García 2004: 35), permiten a Uribe –en la tradición comunitarista– argumentar en contra del universalismo de los derechos humanos y de su aplicabilidad en Colombia⁶. Más bien, lo que salta a la vista en el régimen de Uribe son las especificidades de los hábitos y las tradiciones del *pueblo* y su exposición a la insurgencia, o, en la retórica del gobierno, al terrorismo. Además, en la tradición populista de la prominente figura del *César* (Gramsci 1971), el comunitarismo de Uribe se basa en la subordinación a ‘su’ mandato. En efecto, el presidente se refiere a sí mismo como a un buen pastor que guía su rebaño de ovejas, al afirmar “veo a mis compatriotas de hoy más a través de los ojos de una madre de familia que de un político” (citado en Aristizábel 2008: 29). Esto ha llevado la tendencia populista hacia el mesianismo, por el cual el presidente argumenta que debe continuar en el poder; aunque sólo sea para satisfacer el clamor del *pueblo* por una continuación de su mandato de mano de hierro, como una manera de impedir la llegada de la hecatombe que podría seguir a su salida del podio presidencial⁷.

5 Esto se refiere a la manera en la cual los ciudadanos se sujetan al poder central del estado.

6 Como ejemplo de la postura explícitamente anti-derechos humanos del gobierno de Uribe, en el 2007, 44 defensores de Derechos Humanos fueron asesinados en Colombia. El presidente reaccionó de una manera que implícitamente condonaba a los asesinados declarándoles “terroristas vestidos en ropa de civiles”. Véase “Colombia tiene triste liderazgo mundial en ataques a defensores de derechos humanos,” *Semana*, 20 de junio 2008.

7 Es en esta línea de pensamiento que el presidente se encuentra presionando por una reforma constitucional que le permita una segunda reelección presidencial consecutiva.

La retórica neo-populista de Uribe ha atacado astutamente el bipartidismo y el clientelismo de dominio de la 'oligarquía' tradicional, pero sin tomar ningún paso definitivo para desmantelar tales estructuras. Su 'comunitarismo' Rousseauiano es un instrumento discursivo utilizado para cultivar la sensación de una democracia directa, en la que la corrupción y la complicidad de los políticos, tanto como la burocracia del estado son superadas, al poner a la gente en contacto directo con su devoto y laborioso líder. Este 'proyecto nacional' es visto como una reformulación del modo de representación del estado, por medio de un discurso que equipara el 'gran estado' con el clientelismo y la corrupción, en tanto se prefiguran los beneficios de un estado 'eficiente' y 'productivo' encaminado a servir las necesidades prácticas de los ciudadanos colombianos.

Uribe ha sido un defensor consistente de la disminución de la burocracia estatal y de la reformulación de las instituciones del estado en compañías competitivas, modeladas en el sector privado⁸. En efecto, ha declarado que "las compañías del estado son propiedad de la comunidad. Por esta razón deben ser consideradas y administradas como las compañías privadas más importantes, sometidas a los indicadores más rigurosos de austeridad, productividad y competitividad" (Uribe Vélez 2002: 269).

Este tipo de estado está, por lo tanto, íntimamente ligado al modelo neoliberal de estado, salvo por su retórica populista, anti-institucionalismo y enfoque en la democracia directa. Sin embargo, en el contexto de Colombia, el objetivo de Uribe de poner a la gente en contacto directo con el estado, a través de su programa de *Consejos comunales de gobierno*, ha generado enorme apoyo popular.

Más allá de su visibilidad frente al *pueblo*, uno podría argumentar que la efectividad del

mandato de Uribe está directamente ligada a su campaña por librar a Colombia de las FARC-EP. Particularmente en el periodo 2007-2008, este grupo guerrillero sufrió la desmovilización de 3170 combatientes; asimismo, la muerte o captura de miembros del secretariado de la organización gracias a operaciones exitosas del ejército. Así, por ejemplo, la muerte del segundo al mando, alias Raúl Reyes, en marzo del 2008 durante un bombardeo aéreo en territorio ecuatoriano y el asesinato de Iván Ríos, por un desertor de la guerrilla, alias Rojas. Este reciente 'éxito' de la 'guerra contra las FARC-EP' ha culminado en un índice de popularidad personal del presidente nunca antes visto en este país: 82% de aprobación (*El Tiempo* 24/01/2008). Estos logros militares junto con su 'firme' y a momentos inflamatoria retórica con la que confrontó los ataques políticos de sus dos colegas vecinos, Rafael Correa de Ecuador y Hugo Chávez Frías de Venezuela, han logrado reafirmar el apoyo popular al presidente colombiano, al menos temporalmente.

En suma, la formula comunitarista de Uribe dota de una base popular a un proyecto político más amplio, que impulsa un patrón neoliberal dentro de Colombia. Un proyecto que, ligado a fracciones del capital orientadas globalmente y reforzadas por el poder estructural de los Estados Unidos, todavía requiere ser visto como un proyecto que ha emanado de las fuerzas sociales internas dominantes en el país. Después de evaluar las bases locales de tal proyecto, también es necesario analizar el impacto que Uribe y los programas políticos estadounidenses han tenido en la sociedad colombiana.

Plan Colombia: 'seguridad democrática' y consenso social

En Colombia, el crecimiento del aparato militar/policial ha conducido a una exacerbación de la militarización social y la alienación de la

8 Durante su primer mandato (2002-2006), el gobierno de Uribe cerró 33 entidades públicas, reestructurado varias más, y volvió supérfluos a casi 27 000 empleados públicos (Giraldo 2006).

comunidad. La sociedad colombiana, reconstruida dentro del prevaleciente discurso de la seguridad democrática y el estado comunitarista y contenida por las estructuras autoritarias militares/policiales legitimadas e impulsadas por medio del Plan Colombia, se ha alejado vastamente de cualquier noción europea de sociedad civil, como aspecto integral del gobierno del estado. De hecho, la fragmentación histórica y la no-existencia del estado colombiano en mucho del territorio nacional, junto con los disputas de poder entre facciones armadas por el control de dichos espacios, ha llevado a un gran número de colombianos a organizarse en lo que Fischer ha denominado 'grupos sub-estatales' (2004: 188), sean legales o no. Consecuentemente, en Colombia, la integración social en el proyecto hegemónico⁹ neoliberal, fundado tanto en el bloque de poder local que ayudó a formular y consolidar la ascensión de Uribe como en el proyecto de la 'seguridad democrática', se ha convertido en un discurso superficial y ahístico. El contingente local del orden mundial neoliberal ha buscado formular una ideología comunitarista basada en el neoliberalismo para logar una apariencia de legitimidad social. Sin embargo, la naturaleza autoritaria del presente modelo estatal brilla potente en la mezcla de proyectos del Plan Colombia/Plan Patriota y de la 'seguridad democrática'.

La novedosa pero atemorizante naturaleza de tal autoritarismo consiste en que ha exacerbado la transformación no sólo de la trayectoria político-económica del estado sino también la del ámbito militar en Colombia. De hecho, aunque el estado colombiano no puede proclamar sinceramente que tiene el monopolio sobre los medios de violencia física; sin embargo,

con la escalada del conflicto, como parte del Plan Colombia/Plan Patriota y el incremento del presupuesto nacional destinado a la defensa, el dominio de la violencia se ha vuelto tan descentralizado como el programa económico del gobierno. Esto puede observarse, en primer lugar, en el asalto total a las 'esferas de influencia' de las FARC-EP, especialmente en las regiones sur del país. Esto ha intensificado la expansión territorial del cultivo de coca y su procesamiento. En el 2007, 23 de los 32 departamentos colombianos tenían plantaciones de coca, a pesar de las astronómicas sumas destinadas a atacar la 'oferta' de este producto¹⁰. En segundo lugar, con los numerosos ajustes al Plan Colombia y la intervención cada vez mayor de negocios y mercenarios estadounidenses en este conflicto doméstico, el espectro de actores militares involucrados se ha ampliado considerablemente.

El fracaso del gobierno estadounidense como del colombiano en cuanto a la realización del Plan Colombia, se debe a que han hecho caso omiso de las raíces estructurales de la existencia de las fuerzas insurgentes en Colombia así como del crecimiento de la economía del narcotráfico, ambas convertidas en mecanismos de reproducción, la una de la otra. El gobierno de Uribe y las fuerzas claves de influencia dentro de él han creado un discurso auto-complaciente que niega la existencia de un conflicto interno, prefiriendo conjurar la idea de una faceta local de la guerra global contra el terrorismo. Sin embargo, la evolución histórica de los grupos guerrilleros colombianos otorga peso considerable a una contra-teoría. En efecto, se argumenta que existe un rechazo generalizado a observar la relevancia de la violencia como parte estructural de la acumulación capitalista.

En circunstancias 'normales', la progresión y el crecimiento del capitalismo es visto como

9 Desde Gramsci la hegemonía puede ser vista como el liderazgo consensual predominante en la sociedad, ejercido por el grupo social que mantiene los lazos más fuertes con el modo de producción económico dominante, la administración de dominios institucionales y la definición de una ideología que armoniza sus intereses particulares con los intereses generales de la comunidad nacional.

10 En lugar de disminuir, entre el 2006 y 2007 el área total de cultivo en el país se incrementó en un 27% y el total de hectáreas de cultivo llegó a 99 000 (Naciones Unidas 2008: 2, 14).

un proceso insalvable donde la propiedad se convierte en posesión privada, lo cual impele la proletarización de las masas no propietarias, convirtiendo a esta gente en trabajadores asalariados al igual que en consumidores. Sin embargo, en Colombia, al igual que en un sinnúmero de países, este proceso no tomó lugar de una manera homogénea y 'natural'. Debido a la fragilidad del mercado capitalista interno, el liderazgo social ha estado históricamente en manos de la oligarquía del país; es decir, de terratenientes desocupados más que de capitalistas. Este grupo dominante, en vez de expandir su dominio a través de un crecimiento basado en el mercado y la acumulación de ganancias, utilizó la violencia como medio para adquirir propiedad y renta. Es dentro de este marco que la era más sangrienta de la historia contemporánea de Colombia debe ser analizada. Esta estrategia produjo el desarraigo violento de miles de campesinos rurales y permitió a las élites dominantes obtener tierras y riqueza, los cuales no estaban de ninguna manera vinculadas a la acumulación económica sino al ejercicio de la violencia. Esto ilustra la manera en que la violencia puede ser también un factor en las estrategias de acumulación primitiva de capital. No obstante, la complejidad del proceso colombiano de 'desarrollo' nacional va mucho más allá del desarraigo violento del campesinado y las comunidades indígenas, como medio de 'activación' de la relación capital-fuerza de trabajo. En Colombia, el crecimiento y la incidencia de la industria de narcóticos conlleva la necesidad de una análisis mucho más amplio, que enfoque cómo la transformación del estado también abrió espacios para la narco-economía.

Narcotráfico: de la militarización a la paramilitarización

Como hemos argumentado el Plan Colombia, estructurado dentro del poder militar estadounidense, ha coadyuvado a la consolidación de

un nuevo régimen de acumulación local y regional. Este nuevo régimen ha intensificado la descentralización de la política, la economía y hasta cierto punto, la milicia. Asimismo este Plan ha permitido la expansión y la descentralización de la narco-economía. Esta ubicua pero poco estudiada economía ha reestructurado dramáticamente la vida social y política de Colombia y ha contribuido, considerablemente, al proceso de consolidación del actual orden mundial neoliberal basado en los mercados financieros. Simplemente, el tamaño del mercado global de drogas ilícitas¹¹ y el rol clave que juega Colombia en los dos mercados predominantes de cocaína y heroína¹² muestran la medida en que Colombia se ha implicado en dos economías separadas pero entrelazadas, una regulada y otra que opera de una manera clandestina. Es importante interpretar la naturaleza de ambos mercados para alejarnos de un análisis convencional, que ubica al comercio de bienes y servicios ilegales/no-regulado en un contenedor estanco que no gotea (Nordstrom 2003: 330). Como sostiene Castells (1998), el comercio de bienes y servicios prohibidos formalmente permite la extracción de considerables ganancias de valor agregado. Más aún, cualquiera sea la extensión de la ilegalidad, eventualmente todo dinero ilícito debe ser lavado. Consecuentemente, se vuelve difícil hacer distinciones claras entre redes comerciales y financieras "legales e ilegales, estatales y no-estatales, o locales e internacionales" (Nordstrom 2003: 332). Más bien, los mercados glo-

11 El mercado estimado para el año 2003, asciende a un valor de 13 000 millones de dólares aproximadamente a nivel de producción, 94 000 millones de dólares en ventas al por mayor y 332 000 millones de dólares en ventas al por menor; tomando en consideración embargos y otras pérdidas (UNODC 2005).

12 Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo, con un estimado de 640 toneladas por año de acuerdo a un estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el Crimen (*El Tiempo* 27/06/2006). Aunque Colombia no es el productor principal de heroína en el mundo, sí posee los cultivos más extensos de semillas de amapola en América del Sur.

bales formales están implícitamente formados por las estructuras y transformaciones de las economías ilícitas (ibidem).

En Colombia, dada su histórica inequidad social y política, y las estructuras militares/autoritarias consolidadas a través del Plan Colombia y la ‘seguridad democrática’, la penetración de la economía ilícita en la vida social y política es profunda. Es más, el alce y la politización de grupos paramilitares desde el comienzo de la presidencia de Uribe están en conexión con este proceso. De hecho, Uribe ha tenido una relación notoriamente estrecha con el desarrollo de las facciones paramilitares de Colombia, siendo una de las primeras personas en apoyar públicamente la creación de ‘cooperativas de seguridad y vigilancia privada’ (*Convivir*) durante su mandato como gobernador de Antioquia¹³. Muchos de estos grupos evolucionaron luego en escuadrones de la muerte, los cuales fueron proscritos por el gobierno nacional colombiano en 1999. Sin embargo, confrontar el creciente poder de las facciones paramilitares en Colombia requiere de políticas profundas basadas en un examen de los contextos históricos de su emergencia. Aún el programa de reconciliación del gobierno de Uribe, *La Ley de Justicia y Paz*¹⁴, ha resultado un programa político controversial apoyado por el gobierno y criticado por beneficiar a aquellos implicados en atroces masacres y desplazamientos forzados; al tiempo que no ha buscado mecanismos adecuados de compensación para las víctimas¹⁵.

Las intrincadas conexiones entre las estructuras de poder paramilitar y el negocio del tráfico de drogas y el *compadrazgo* político se han vuelto demasiado visibles durante el gobierno de Uribe. Pese a la decisión unilateral de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de cese al fuego en noviembre de 2002, en los tres años siguientes y en varias regiones de influencia paramilitar (el norte, este y ciertas zonas del oeste colombiano), se registraron más de 2300 asesinatos, además de un aumento en apropiaciones de muchas de las tierras más fértiles del país.

La conexión del paramilitarismo con el nuevo régimen regional de acumulación calza bien con la idea mencionada previamente de acumulación primitiva a través de la violencia. Los negocios de paramilitares se extienden tanto a las economías legales como a las ilegales de Colombia, pero influyen también en las esferas más altas del gobierno, alcanzando cada vez mayor injerencia. Son numerosos los escándalos que han salido a la luz pública en los últimos dos años; culminado, en abril del 2008, con el encarcelamiento de 29 parlamentarios, la investigación de 51 congresistas, al igual que la de un significativo número de alcaldes, gobernadores, personal militar y diplomáticos. Todos acusados de complicidad con paramilitares con fines económicos y electorales.

Todos estos eventos resaltan la progresiva desregulación de las esferas política, económica y militar en Colombia, las que se han combinado para deshacer el tejido de la soberanía del estado nacional. Esto pese a las intenciones del gobierno de Uribe de reforzar el estado tradicionalmente debilitado, dando forma a un proyecto nacional encaminado a poner todo el territorio colombiano bajo el mando del gobierno central. El programa político nacional de reclamar el control estatal sobre vastos tramos del territorio colombiano que se han desarrollado de manera relativamente autónoma, se funda precisamente en el Plan Colombia y su énfasis en la reducción del cultivo

13 Estos servicios fueron establecidos primero durante la presidencia de Ernesto Samper (1994-1998) y fueron autorizados por el Decreto No. 356 (Garzón 2005).

14 La Ley de Justicia y Paz aprobada el 22 de junio de 2005 tiene el objetivo oficial de construir un proceso de reconciliación basado en la desmovilización de lo que el gobierno denomina *actores* en el conflicto del país.

15 En efecto, después de una larga y controvertida negociación para aprobar la Ley de Víctimas, la coalición uribista la hundió, argumentando que su aprobación llevaría al estado a la bancarrota. Véase “Ley de Víctimas se hunde ante presión del Gobierno”, *El Espectador*, 18/06/2009.

de coca por medio de la intensificación de los programas de fumigación en áreas bajo el control de facto de las FARC-EP. Si bien todo esto ha debilitado las capacidades militares de las guerrillas colombianas; por otro lado, es plausible sostener que el crecimiento político del paramilitarismo en Colombia se ha fortalecido bajo el mandato de Uribe.

Los grupos paramilitares se han multiplicado y prosperado debido a la colaboración implícita y continua de sectores del gobierno estadounidense, el gobierno colombiano y el aparato militar/policial, así como de numerosas compañías transnacionales que operan en Colombia¹⁶. Esta compleja red de militarización social, que ha sido legitimada a través del Plan Colombia, ha reforzado la naturaleza autoritaria del estado nacional y ha ocasionado una situación en la que la aquiescencia social se logra, no a través del consenso sino a través del miedo. El complejo proceso de influencia narco-paramilitar en vastas regiones de Colombia y en estructuras críticas del sistema político perpetúa las posibilidades para el crecimiento de la corrupción en todas las áreas de la vida diaria; al igual que constriñe severamente cualquier esfuerzo de resistencia social.

Estas crecientes estructuras de poder coercitivo en Colombia se incorporan al programa disciplinar neoliberal de reforma económica, política y judicial; y ayudando a asegurar el nuevo régimen de acumulación regional y consolidar el dominio de las fuerzas sociales colombianas que forman parte del orden neoliberal global. Los gobiernos de Pastrana y Uribe

han promulgado legislación encaminada a mantener el control social. Con el fin de accentuar esta faceta y la estabilidad de su gobierno, Uribe, en línea con la reforma del Plan Colombia, instituyó la Ley de Estatuto Antiterrista. Este estatuto permite que cualquier tipo de protesta social pueda ser considerada como una forma de terrorismo, retornando a la doctrina militar de la década de los ochenta, enfocada en el ‘enemigo interno’ y a través de la cual se caracterizaba a los miembros de la sociedad civil como potenciales ‘subversivos’ (Ediciones NCOS 1995). Dichos instrumentos políticos intentan unir la aceptación nacional, a costa de eliminar cualquier posibilidad para el disenso social (Caycedo 2002: 621). Esto ha llevado a la presente situación de subordinación social impuesta militar y judicialmente y bien resumidas en las palabras de uno de los oficiales de más alto rango, el General Fernando Tapias, quien sostiene que “hoy el apoyo que tienen [el estado y el ejército] de la población civil es básicamente resultado del miedo” (citado en Caycedo 2002: 621).

El programa político de Uribe: ¿hegemonía o dominación?

El fundamento militar del proyecto neoliberal en Colombia (y en menor medida a lo largo de la región) nos lleva a dudar de su ‘hegemonía’ –en términos de Gramsci– respecto a su consolidación y reproducción. En Colombia específicamente, la transformación del estado se basa en la premisa de la subyugación de aquellas fuerzas sociales opuestas a la dominación neoliberal y no en la incorporación de sus necesidades en un programa político y social más amplio. En tal modelo, la legitimidad y el consenso se obtienen a través de la fuerza militar y muchas otras fuerzas armadas de terror, descentralizadas y listas para intervenir cuando la apatía social se convierte en protesta. El proyecto de Uribe de comunitarismo neoliberal, basado en el poder y la autonomía militar es

16 Algunas compañías que han sido acusadas públicamente de colaborar con los grupos paramilitares y el Ejército Colombiano en el acoso y asesinato de numerosos dirigentes sindicales, activistas políticos, indígenas y otros miembros de la sociedad colombiana en las últimas dos décadas son: BP Exploration Company, Occidental Petroleum, Drummond y Coca-Cola. Además, a finales del 2007, la Corte Suprema estadounidense impuso una multa de 25 millones de dólares a Chiquita por haber pagado a grupos paramilitares en sus regiones de operación de Urabá y el Magdalena.

emblemático del ‘nuevo orden mundial’, el cual se levanta no sobre una cooperación exitosa, sino sobre la violencia militar y la disciplina social (Ceceña 2004: 31). Consecuentemente, antes que hablar de hegemonía cuando se piensa en el ‘nuevo orden mundial neoliberal’, hay que entenderlo, más bien, como caracterizado por una ‘hegemonía fragmentada’. Pues las externalidades asociadas con dicho orden expansivo globalmente son traspasadas generalmente a países del Sur, donde, como demuestra el análisis de Colombia, los proyectos del estado y las estrategias de acumulación no involucran el consenso social.

Inequívocamente, en el ejemplo colombiano, la violencia y coerción militar, bajo el paraguas de la ‘seguridad democrática’ y el Plan Colombia, se han convertido en la razón de ser de la acción del estado. Tal programa militarizado del estado se asienta en la necesidad de demostrar la dominación territorial del estado sobre la nación. En efecto, el proyecto comunitarista del gobierno de ‘seguridad democrática’ de Uribe tuvo el objetivo de establecer la presencia y el control del estado por medio de la conquista militar de vastas áreas bajo el control de la guerrilla o de los paramilitares. Pero este objetivo no se ha logrado. Más bien, la fragmentación histórica del estado nacional persiste, aunque su forma ha sido alterada. Con la exacerbación del proceso de descentralización política que comenzó a mediados de los ochenta, en combinación con la pérdida del control del gobierno nacional de la política macro-económica frente al FMI, el gobierno nacional ha fracturado, aún más, su habilidad de formular y promover un verdadero proyecto nacional. Si bien estos procesos han ayudado a lo que se podría llamar “reformulación de los micro-poderes”, así como a la desaparición de la política bipartidista tradicional (liberales/conservadores), las fuerzas emergentes no se han unificado adecuadamente en un proyecto general. Al contrario, se ha exacerbado la disyunción del estado-nación y la consolidación de centros

locales con sus propios régimes de poder, a través de la posesión y el control, a veces ilegales y otras seudo-legales, de estas localidades; sin considerar los conflictos resultantes.

Finalmente, el rol que el gobierno estadounidense ha jugado en la intensificación del conflicto colombiano, al insistir en la implementación de políticas nada exitosas, para erradicar el cultivo de coca y a los grupos guerrilleros a quienes acusa de controlar tales actividades, ha fomentado un proceso de militarización social. Esto ha reestructurado el ámbito político en uno militar, provocando no una escalada de la política sino una ruptura de esta, a tal punto que hoy en Colombia el estado nacional puede ser visto como el operador de una forma de democracia política vacía. Forma de “democracia” que otorga primacía a los intereses a gran escala del capital y a las fuerzas parásitas seudo-estatales que las alimentan y las asisten a expensas de intereses y necesidades más grandes de la sociedad colombiana. La represión militar y el asociado ciclo de acumulación primitiva ha establecido los fundamentos para la consolidación de un régimen extractivo especulativo, el cual ha necesitado la formulación discursiva de un aparente compromiso de clase, aún cuando es evidente que este consenso está basado, no en la búsqueda constructiva de un compromiso, sino más bien, en obtención de un apoyo por medio del miedo.

Bibliografía

- Aristizábel, José, 2008, “En contravía de la democracia”, *Sin Democracia, Sin Derechos: Quinto Año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez*, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Bogotá, pp.25-34
- Castells, Manuel, 1998, *End of Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture*, Blackwell, Cambridge, Massachusetts y Oxford, tomo III.
- Caycedo, Jaime, 2002, “¿Guerra total o política de paz permanente de Estado?”, en Jairo

- Estrada Álvarez, editor, *Plan Colombia y la intensificación de la guerra, aspectos globales y locales*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Ceceña, Ana, 2004, "Militarización y resistencia", en *Revista del Observatorio Social de América Latina (OSAL)*, Los desafíos de América Latina y las elecciones en EE.UU. Los foros sociales Balances y documentos, septiembre-diciembre.
- Ediciones NCOS, 1995, *Tras los Pasos Perdidos de la Guerra Sucia, Paramilitarismo, y Operaciones Encubiertas en Colombia*, Ediciones NCOS, Bruselas.
- El Tiempo, 2008, *Presidente Uribe realizó su consejo comunal número 200, estilo de gobierno que ha provocado polémica*, Bogotá, 3 de junio.
- _____, 2008, *Drogas y Democracia*, Bogotá, 24 de mayo.
- _____, 2008, *Imagen favorable del presidente Uribe rompió récord del 80 por ciento*, Bogotá, 24 de enero.
- _____, 2006, *Menos coca, más cocaína*, Bogotá, 27 de junio.
- El Espectador, 2009, *Ley de Víctimas se hunde ante presión del Gobierno*, Bogotá, 18 de junio.
- Estrada, Jairo, 2002, *Plan Colombia y la intensificación de la guerra, aspectos globales y locales*, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Fischer, Thomas, 2004, "Colombia: Estado débil sin territorialidad entera. Una versión histórica", en Gustavo Montaño, editor, *Dimensiones Territoriales de la Guerra y la Paz*, Universidad Nacional de Colombia, Red de Estudios de Espacio y Territorio (RET), Bogotá, pp.183-196.
- Garzón, Juan Carlos, 2005, "La complejidad paramilitar: una aproximación estratégica", en Alfredo Rangel, editor, *El Poder Paramilitar*, editorial Planeta-Fundación seguridad y democracia, Bogotá.
- Giraldo, César, "Economía pública y manejo fiscal", en Miguel Cárdenas y Ricardo Bonilla, coordinadores, *Políticas públicas para Colombia: empleo, educación, política agraria, salud, régimen político, distribución del ingreso, economía pública, regionalización*, Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FES-COL)/Fondo Editorial (CEREC), Bogotá.
- Gramsci, Antonio, 1971, *Selections from the Prison Notebooks*, Lawrence y Wishart, Londres.
- Hylton, Forrest, 2003, "An evil hour", *New Left Review* No. 23, septiembre-octubre, pp. 51-93.
- Jessop, Bob, 2002, *The Future of the Capitalist State*, Polity Press, Cambridge y Oxford.
- MacIntyre, Alasdair, 1984, *Tras La Virtud*, Ed. Crítica, Barcelona.
- Naciones Unidas, 2008, *Colombia: Monitoreo De Cultivos De Coca 2007*, Naciones Unidas oficina contra la droga y el delito / Gobierno de Colombia, Bogotá.
- Nordstrom, Carolyn, 2002, "Shadows and sovereigns", en Neil Brenner, Bob Jessop y otros, editores, *State/ Space: A Reader*, Blackwell, Estados Unidos.
- Revista Semana, 2008, *Colombia tiene triste liderazgo mundial en ataques a defensores de derechos humanos*, Bogotá, 20 de junio.
- Sousa Santos, Boaventura de y Mauricio Villegas García, 2004, "Colombia: El revés del contrato social de la Modernidad", en Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas, *El Caleidoscopio de las Justicias En Colombia*, Universidad de los Andes/Siglo del Hombre Editores, Bogotá.
- Torre, Cristina de la, 2005, *Álvaro Uribe o el neopopulismo en Colombia*, La Carreta, Medellín.
- United Nations Office on Drugs and Crime, 2005, *World Drug Report 2005*, UNDOC, Vienna.
- Uribe, Álvaro Vélez, 2002, *Del Escritorio de Uribe*, Libros del IELA, Medellín.
- Venegas, Ivonne, 2007, "Gasto militar del 2008 crecerá tanto que se teme por finanzas del gobierno y balanza comercial." en *El Tiempo*, 19 de diciembre